SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 24/2016

Recomendación N°	24/2016
Autoridades Responsables	Elementos de Seguridad Pública del Estado
Expediente	2VQU-209/2015
Fecha de emisión/	29 de septiembre de 2016
HECHOS	
<p>El 2 de abril de 2015, cerca de las 22:30 horas, V1 fue detenido en el municipio de Aquismón San Luis Potosí, por elementos de la Policía Estatal. La víctima refirió que viajaba en compañía de V2, a bordo de un vehículo y se dirigían a la cabecera municipal, pero al entrar a la localidad de Tanzozob dos unidades de la Policía Estatal les marcaron el alto y les dijeron que se trataba de una revisión de rutina, pidiéndoles que se identificaran.</p> <p>Las víctimas precisaron que los agentes de la Policía Estatal los bajaron del vehículo y les preguntaron cuál era su destino; posterior a ello les indicaron que podían continuar su camino, por lo que subieron al vehículo y metros más adelante los mismos policías los alcanzan y les piden que vuelvan a descender para de inmediato colocarles “esposas” en las muñecas y subirlos a la patrulla, siendo trasladados a Ciudad Valles a las oficinas de la Policía Estatal, para después ser remitidos al Ministerio Público Federal, acusados de portar dos granadas en la guantera del vehículo.</p> <p>Las personas agraviadas también señalaron que desde el momento de su detención no se les explicó el motivo de la misma, ni les permitieron realizar una llamada a sus familiares o a un abogado para su defensa.</p>	
Derechos Vulnerados	✓ Derecho a la libertad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica
OBSERVACIONES	
<p>Con base en las evidencias recabadas, se advirtió que el 2 de abril de 2015, V1 y V2, fueron detenidos por Agentes de la Policía Estatal en la localidad de Tanzozob del municipio de Aquismón, San Luis Potosí y procedieron a su aseguramiento bajo el argumento de delito flagrante señalando que en el interior del vehículo se localizaron dos granadas de fragmentación, lo cual prohíbe la Ley Federal de Arma de Fuego y Explosivos, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación con sede en Ciudad Valles.</p> <p>En este contexto, las víctimas manifestaron que el 2 de abril de 2015, fueron detenidos por agentes de la Policía Estatal, cuando viajaban a bordo de un vehículo por la localidad de Tanzozob, municipio de Aquismón. Que hubo un primer contacto con los agentes de autoridad, y les indicaron que detuvieran la marcha, que después de hacer una revisión al vehículo les dicen que continuaran su camino. Lo anterior se corroboró con el testimonio de T1, quien refirió que esa revisión se llevó a cabo frente a una tienda de abarrotes, percatándose que en ese lugar los agentes no realizaron ninguna detención.</p>	

En este orden de ideas, las víctimas fueron coincidentes en señalar, que en esa primera revisión que les hacen los agentes de la Policía Estatal, siguen su camino y después una de las patrullas los vuelve a interceptar y les piden que vuelvan a descender y cuando lo hacen los esposaron y subieron a la patrulla, y el vehículo en el que se trasladaban quedó en resguardo de un agente de la Policía Estatal quien lo manejó hasta las oficinas de esa corporación en el municipio de Ciudad Valles.

Ahora bien, en el oficio 138/GGJV/2015, AR1, AR2, AR3 y AR4, agentes de la Policía Estatal, señalaron que el 2 de abril de 2015, al desempeñar servicio de seguridad y vigilancia sobre el camino estatal que conduce de la Comunidad de Tantzob del municipio de Aquismón, observaron un vehículo marca Chevrolet, tipo pick up que transitaba a velocidad inmoderada, por lo que procedieron a marcarle el alto, pero hicieron caso omiso, por lo que realizan la persecución y les dieron alcance, realizan una revisión corporal a los ocupantes y en el vehículo localizaron en la guantera dos granadas de fragmentación, una de ellas en color rojo y la otra en color verde, ambas con espoleta puesta, por lo que procedieron a la detención.

La evidencia que sobre el presente caso se recabó permite observar que AR1, AR2, AR3 y AR4 agentes de la Policía Estatal, realizaron una primera revisión a V1 y V2, así como al vehículo en el que viajaban, y los dejan continuar con su camino. De acuerdo con lo que señalan las víctimas y que se refuerza con el testimonio de V1, metros más adelante fueron alcanzados por los elementos aprehensores quienes les cerraron el paso, pidiéndoles que descendieran del vehículo procediendo inmediatamente a esposarlos y a subirlos a una patrulla para ser trasladados al Ministerio Público Federal con sede en Ciudad Valles.

En este sentido, este Organismo observa que V1 y V2, en un primer momento fueron revisados por los agentes estatales y de esa revisión no derivó ningún aseguramiento o detención ya que se les permitió continuar con su camino, como se corroboró con lo manifestado por las víctimas, así como de T1, que fue hasta que les dieron alcance, metros adelante, que procedieron a su detención sin que justificaran en su informe elementos necesarios para determinar que la detención reunía los requisitos de delito flagrante, como lo expuso el Juez Séptimo de Distrito en el Estado en la resolución definitiva que dictó dentro de la Causa Penal 1.

En este contexto, resulta pertinente señalar que el artículo 16 constitucional establece diversos derechos y excepciones que implican la restricción a los mismos, que ante lo cual la libertad personal constituye un derecho fundamental que no puede ser restringido, salvo en las condiciones que la Constitución Federal establece, como en el caso lo son las detenciones en flagrancia, derivadas de la existencia de elementos que permitan atribuir a una persona su probable responsabilidad en la comisión de un hecho calificado como delito por las leyes penales.

En la resolución emitida por el Juez de la Causa Penal 1, de 10 de junio de 2016, argumentó que la flagrancia es siempre una condición que se configura antes de la detención. Esto implica que la policía no tiene facultades

para detener ante la singular sospecha de que alguien pudiera estar cometiendo un delito o estuviera por cometerlo, o porque presuma que esté involucrado en la comisión de un delito objeto de investigación

Al resolver en definitiva la Causa Penal 1, el citado juzgador fue enfático en precisar que los agentes de autoridad no relataron en su informe las circunstancias objetivas que pudieran haber apreciado sobre la posible comisión del antijurídico de portación de artefactos explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea que atribuyeron a V1 y V2, y que no aportaron mayores datos en relación al motivo que los condujo a practicar una revisión precautoria a las víctimas y al automóvil en el que se transportaban.

El Juez Federal de la Causa Penal 1, dejó en claro que los agentes aprehensores dijeron que la detención se basó en el hecho de que el vehículo era conducido a velocidad inmoderada, lo cual no acreditaron en la Causa Penal 1. En tal sentido, este Organismo contó con evidencia de que la detención no ocurrió bajo esa circunstancia, ya que los agentes aprehensores tuvieron un primer contacto con V1 y V2, quienes después de realizar una revisión les indicaron que continuaran su camino, y enseguida les dan alcance y proceden a su detención bajo el señalamiento de que portaban granadas de fragmentación.

Se advierte también que las víctimas fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público Federal a las 03:40 horas del 3 de abril de 2015, sin que existan causa que haya justificado esa demora ya que la autoridad no presentó argumentos para justificar el retraso y los motivos que impidieron turnar el caso a la autoridad competente, en contravención del párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona detenida deberá ser puesta sin demora a disposición de la autoridad competente, es decir en un plazo razonable.

Para este Organismo Público Autónomo llama la atención la demora injustificada en que incurrieron AR1, AR2, AR3 y AR4, agentes de la Policía Estatal para dejar a disposición de autoridad competente a las víctimas, debido a que solamente elaboraron el certificado médico, Parte Informativo e Informe Policía Homologado lo que de acuerdo a la evidencia no revistieron mayor complejidad para su elaboración, lo que pone en evidencia que dichos tramites no son complejos, y que la distancia entre ambos puntos, es decir el edificio de la Policía Estatal se localiza aproximadamente a 500 metros de las oficinas del Agente del Ministerio Público Federal, ambas dentro de la misma demarcación, es decir en la cabecera municipal Ciudad Valles, San Luis Potosí.

En este sentido, se encontró evidencia suficiente para tener en consideración que en presente caso existe la presenció de que se incurrió en retención indebida por parte de los agentes aprehensores, al exceder de manera injustificada el plazo razonable para que la víctima fuera puesta a disposición del Ministerio Público de manera inmediata, a efecto de que se definiera y determinara su situación jurídica, causando con ello una violación a sus derechos humanos.

En otro aspecto de la evidencia, por lo que hace a la incomunicación se advirtió que si bien, AR3 agente de la Policía Estatal elaboró el acta de lectura de derechos de V1 y V2, existen datos suficientes que permiten acreditar que la autoridad no aportó información que permitiera sustentar, que sus familiares o sus abogados defensores tuvieron contacto con los agraviados para conocer de la situación y motivos de su detención, pues la Dirección General de Seguridad Pública del Estado no aportó elementos de convicción que acrediten que a V1 y V2, se les permitió tener comunicación con sus familiares o abogados defensores desde el momento de su detención, por lo que se contravino lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracciones II y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se señala que toda incomunicación queda prohibida y será sancionada por la ley penal, y que el defensor puede ser nombrado por el detenido desde el momento de la detención.

En este sentido, Q1, hermano de V1, precisó que cuando su familiar fue trasladado e internado en el Centro Federal de Readaptación Número 5 ubicado en el Estado de Veracruz, fue cuando tuvo conocimiento del lugar donde se encontraba recluso en compañía, al igual que V2, con lo que se evidencia que no existen datos de que las autoridades responsables de la detención permitieran a los agraviados realizar una llamada telefónica ni de las circunstancias por las cuales tuvieron dificultad para hacer efectivo ese derecho.

RECOMENDACIONES

Secretario de Seguridad Pública del Estado

PRIMERA. Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se repare el daño ocasionado a V1 y V2, que incluya el tratamiento psicológico que requieran, con motivo de la responsabilidad institucional en que incurrieron AR1, AR2, AR3 y AR4 agentes de Seguridad Pública del Estado.

SEGUNDA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en la inscripción de V1 y V2 en el Registro Estatal de Víctimas, para los efectos de la reparación del daño en los términos que establece la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí y su Reglamento.

TERCERA. Colabore ampliamente con el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto que substancie y concluya Procedimiento Administrativo de responsabilidad con motivo de la vista que realice este Organismo en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos, en razón de las consideraciones vertidas en la presente Recomendación.

CUARTA. Se incluya en el programa de capacitación a los elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con destacamento en la Zona Huasteca, sobre el tema de derechos humanos, en particular, sobre los derechos a la libertad personal, requisitos sobre la detención de acuerdo a los requisitos legales así como del código Nacional de Procedimientos Penales, y de los derechos que prevalecen durante la detención.